

RE: NOTIFICACION AUTO SU PROCESO Ref.: Vigilancia Judicial Administrativa 54 001 11 01 001-2022-00007-00-NUESTRO HIPOTECARIO 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 4/02/2022 5:09 PM

Para: Heberto Oviedo Montiel <oviedo12@hotmail.es>

Cordial saludo, recibido.

Horario de lunes a viernes de 08:00 A 12:00 pm. y de 1:00 a 5:00 pm.

Atentamente,

JAIME ELIECER ALMEYDA ROJAS

Asistente Judicial

Juzgado 07 Civil Circuito de Cúcuta

De: Heberto Oviedo Montiel <oviedo12@hotmail.es>

Enviado: viernes, 4 de febrero de 2022 4:52 p. m.

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: NOTIFICACION AUTO SU PROCESO Ref.: Vigilancia Judicial Administrativa 54 001 11 01 001-2022-00007-00-NUESTRO HIPOTECARIO 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Señor

JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA

E.

S.

D.

Referencia : PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

Demandante : BANCOLOMBIA S.A.

Demandado : SOCIEDAD TRISTAR S.A.S Y OTROS.

Radicado : 54001315300720140005300.

HEBERTO OVIEDO MONTIEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.71.983.046 de Turbo (Antioquía), abogado en ejercicio con T.P Nro.247.398 del C.S.J, obrando como apoderado de **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.60.363.351, representante legal de la sociedad ATLANTIS DAZA, VIAJES Y TURISMO S.A.S., con este escrito interpongo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del proceso.

Adjunto documento PDF.

Atentamente,

Heberto Oviedo Montiel

De: Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 7:16 a. m.

Para: Despacho 01 Sala Administrativa Consejo Seccional De La Judicatura - N. De Santander - Cúcuta

<desadmcsj01cuc@notificacionesrj.gov.co>; Despacho 01 Sala Administrativa Consejo Seccional De La Judicatura -

N. De Santander - Cúcuta <desadmcsj01cuc@notificacionesrj.gov.co>; HEBERTO OVIEDO MONTIEL <oviedo12@hotmail.es>; HEBERTO OVIEDO MONTIEL <oviedo12@hotmail.es>

Asunto: NOTIFICACION AUTO SU PROCESO Ref.: Vigilancia Judicial Administrativa 54 001 11 01 001-2022-00007-00-NUESTRO HIPOTECARIO 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Cordial saludo, en documento adjunto remito auto de la referencia.
Al contestar cite el número del radicado, horario de lunes a viernes de 08:00 A 12:00 pm. y de 1:00 a 5:00 pm.

Atentamente,

JAIME ELIECER ALMEYDA ROJAS
Asistente Judicial
Juzgado 07 Civil Circuito de Cúcuta

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

RE: RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO APELACIÓN 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 4/02/2022 5:09 PM

Para: Heberto Oviedo Montiel <oviedo12@hotmail.es>

Cordial saludo, recibido.

Horario de lunes a viernes de 08:00 A 12:00 pm. y de 1:00 a 5:00 pm.

Atentamente,

JAIME ELIECER ALMEYDA ROJAS

Asistente Judicial

Juzgado 07 Civil Circuito de Cúcuta

De: Heberto Oviedo Montiel <oviedo12@hotmail.es>

Enviado: viernes, 4 de febrero de 2022 4:54 p. m.

Para: Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN Y SUBSIDIO APELACIÓN 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Señor

JUEZ SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA

E.

S.

D.

Referencia : PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

Demandante : BANCOLOMBIA S.A.

Demandado : SOCIEDAD TRISTAR S.A.S Y OTROS.

Radicado : 54001315300720140005300.

HEBERTO OVIEDO MONTIEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.71.983.046 de Turbo (Antioquía), abogado en ejercicio con T.P Nro.247.398 del C.S.J, obrando como apoderado de **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.60.363.351, representante legal de la sociedad ATLANTIS DAZA, VIAJES Y TURISMO S.A.S., con este escrito interpongo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del proceso.

Adjunto documento PDF.

Atentamente,

Heberto Oviedo Montiel

De: Juzgado 07 Civil Circuito - N. De Santander - Cúcuta <jcivccu7@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 2 de febrero de 2022 7:16 a. m.

Para: Despacho 01 Sala Administrativa Consejo Seccional De La Judicatura - N. De Santander - Cúcuta

<desadmcsj01cuc@notificacionesrj.gov.co>; Despacho 01 Sala Administrativa Consejo Seccional De La Judicatura -

N. De Santander - Cúcuta <desadmcsj01cuc@notificacionesrj.gov.co>; HEBERTO OVIEDO MONTIEL <oviedo12@hotmail.es>; HEBERTO OVIEDO MONTIEL <oviedo12@hotmail.es>

Asunto: NOTIFICACION AUTO SU PROCESO Ref.: Vigilancia Judicial Administrativa 54 001 11 01 001-2022-00007-00-NUESTRO HIPOTECARIO 54-001-31-53-007-2014-00053-00

Cordial saludo, en documento adjunto remito auto de la referencia.
Al contestar cite el número del radicado, horario de lunes a viernes de 08:00 A 12:00 pm. y de 1:00 a 5:00 pm.

Atentamente,

JAIME ELIECER ALMEYDA ROJAS
Asistente Judicial
Juzgado 07 Civil Circuito de Cúcuta

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



E. S. D.

Referencia : PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
Demandante : BANCOLOMBIA S.A.
Demandado : SOCIEDAD TRISTAR S.A.S Y OTROS.
Radicado : 54001315300720140005300.

HEBERTO OVIEDO MONTIEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.71.983.046 de Turbo (Antioquía), abogado en ejercicio con T.P Nro.247.398 del C.S.J, obrando como apoderado de **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.60.363.351, representante legal de la sociedad ATLANTIS DAZA, VIAJES Y TURISMO S.A.S., con este escrito interpongo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del proceso, teniendo en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Rechaza de plano la Señora Juez la nulidad interpuesta aduciendo lo siguiente:

Clarificado lo anterior y de cara a los argumentos expuestos por el memorialista, debe el Despacho nuevamente precisar que la oposición presentada por la señora Sandra Daza durante la parte inicial de la diligencia de entrega del pasado 19 de noviembre de 2021, fue analizada y resuelta de manera desfavorable por el Comisionado. Ello al consignarse en el acta: “no se concede oposición alguna”.

Igualmente, del análisis del acta en comento, se concluye que contrario a lo dicho por el memorialista en hecho sexto de su escrito de nulidad, el Comisionado si permitió la presentación de la oposición, ello al escuchar y consignar en el acta, los argumentos en los cuales se fundaba esta, corriendo incluso traslado a la parte contraria para que emitiera las manifestaciones que encontrase pertinentes, y luego de ello, adoptó la decisión de “no conceder” la oposición propuesta. Lo que se traduce en la negativa de la misma.

Decisión anterior, contra la cual ni en el acta de la diligencia, ni en el escrito de nulidad, se consigna la interposición de recurso alguno. Siendo de gran extrañeza que la señora Sandra Daza, estado debidamente representada por apoderado judicial, el doctor Heberto Oviedo, mismo que presentó la nulidad, no haya exigido dejar constancia en el acta sobre la interposición del recurso, si el mismo existiese. Y contrario a ello, se observa que el apoderado firmo el acta, sin dejar constancia alguna sobre la no consignación del recurso interpuesto.

Es de anotar que lo argumentado por el Despacho en sus consideraciones viola el debido proceso pues hace una interpretación errónea del artículo 309 del CGP, el cual en su numeral 7 establece:

7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia.

Como bien lo afirma la Señora Juez la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refería a la totalidad de los bienes objeto de ella, razón por la cual no procedían recursos sino que el comisionado debía remitir inmediatamente el despacho al comitente y este debió remitir el Despacho comisorio al comitente, lo que no ocurrió en el presente caso, pues el comisionado insistió en la diligencia de entrega al punto de llevarla a cabo aún habiéndose presentado escrito de nulidad, pues extralimitó sus funciones, no estaba facultado para decidir sobre la oposición ya que esta facultad solo le está dada directamente al juez de conocimiento.

Por lo anteriormente expuesto no era procedente interponer recursos ni reposición ni apelación en el acta de la diligencia, pues tampoco estaba el Inspector comisionado facultado para resolverlos, pues el debido proceso establece que al no ser la señora **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, tenedora sino poseedora ya que desde el 2016 como se explicó en escrito de nulidad nadie ejerció actos de señorío del bien y esta los asumió y por tanto la sentencia y el remate no tuvieron efectos sobre ella, tan cierto es esto que la misma señora Juez en los argumentos del auto adujo: “Así las cosas, no es posible entonces aducir haber adquirido la condición de poseedor durante el término que el local permaneció en secuestro judicial, pues como se dijo, el bien se encontraba en administración y legítima tenencia de la secuestre designada. Decisión que era del conocimiento de la empresa Atlantis Daza. Situación distinta es que el tenedor hubiera omitido su deber de continuar el pago de los cánones de arrendamiento a la secuestre o que ésta, omitiera cobrarlos y rendir las cuentas al Despacho”; es decir la misma Juez deduce que la secuestre nunca cobro arriendos y nunca ejerció manutención, cuidado y sostenimiento del bien, razón por la cual también es dable deducir que sí la señora Daza Rodríguez ejerció actos de señorío en el local pues nadie mas los ejerció desde el 2016.

De igual manera me permito traer a colación decisión de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil nueve (2009).- Ref.: 11001-3103-031-1999-01248-01; donde se establece que el secuestro no interrumpe la posesión del bien; así:

Reprochó al ad quem que con base en el documento obrante a folio 99 del cuaderno No. 1, correspondiente al “acta de [la] diligencia practicada en el inmueble objeto de usucapión el día... 7 de septiembre de 1999”, hubiese colegido que el secuestro del bien “impide la declaración del dominio por el modo de la prescripción adquisitiva”, en razón a que “el depósito judicial arrebató la tenencia jurídica del bien al aquí demandante y por ende el ejercicio de la posesión actual”, ya que esa conclusión “es totalmente equivocada y alejada de la realidad, como lo demuestran todas y cada una de las pruebas practicadas y allegadas al proceso, mediante las cuales se acredita de manera fehaciente que el actor en ningún instante ha dejado de ejecutar sobre el inmueble... actos o hechos positivos de aquellos [a] que solo da derecho el dominio en forma ininterrumpida desde la fecha antes señalada y aún continua haciéndolo, disponiendo del mismo, efectuando mejoras, mantenimiento, pago de servicios públicos, impuestos, etc.”.

Aseveró que “la jurisprudencia y la doctrina desde vieja data ha[n] reiterado que el EMBARGO, SECUESTRO O DEPÓSITO JUDICIAL no impiden ejercer los actos de posesión sobre determinado bien”, en pro de lo cual invocó el mismo fallo de esta Corporación que citó el Tribunal. 5. Censuró que el sentenciador de segunda instancia, en opinión del recurrente, hubiese considerado que, a consecuencia de la diligencia de secuestro,



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

el inmueble materia del litigio se encontrara fuera del comercio, divergencia que sustentó con transcripción de la sentencia de la Sala fechada el 20 de mayo de 1930, luego de lo cual añadió que “si los bienes EMBARGADOS Y SECUESTRADOS se (sic) estuviesen fuera del comercio humano, en primer lugar sería ilícito hacer cualquier tipo de negociación, tradición o compraventa de éstos, haciéndose imposible su adquisición por cualquier medio o modo, razón por la cual la posición del Tribunal al respecto, es totalmente contraevidente, toda vez que los bienes que soportan estos gravámenes sí son objeto de adquisición por los medios, formas y modos establecidos en la ley”.

Calificó de equivocada la apreciación del ad quem, relativa a que la manifestación que hizo el secuestro en la diligencia recogida en el acta que obra a folio 99 del cuaderno principal, cuando señaló que “desde ya asumo la administración de este inmueble para lo cual se hace necesario suscribir un contrato de arrendamiento”, acreditaba por sí sola la tenencia del mismo en cabeza del auxiliar de la justicia, puesto que dicha expresión “es un simple decir o una mera intención”, más cuando él nunca realizó “ninguna función, acto o hecho como administrador” y, mucho menos, “suscribió CONTRATO DE ARRENDAMIENTO... sobre el referido inmueble con el poseedor señor GERMAN TARCISIO GODOY ARDILA” o con otra persona, ni lo dejó en depósito, “sino que por el contrario el demandante en este proceso es quien siempre desde mediados de 1978 ha venido ejerciendo actos de señor y dueño”, los cuales se encuentran “plenamente probados mediante la declaración de testigos, documentos, inspección y peritación”.

En oportunidad más cercana, la Corporación insistió en que ni el embargo, ni el secuestro de un bien, traducen la interrupción de la prescripción adquisitiva, puesto que “medidas judiciales de ese linaje constituyen apenas títulos de mera tenencia como lo tiene definido el artículo 775 del mismo código [civil], luego de los secuestros debe decirse que son siempre servidores de la posesión ajena, o por mejor expresarlo ejecutores materiales del señorío posesorio que otros ostentan...” (se subraya). Adelante observó, que cualquiera sea la modalidad y la finalidad del secuestro practicado, él “... „se perfecciona con la entrega de la cosa que a título precario hace el juez al secuestro; y este cesa en sus funciones cuando, en acatamiento de la orden judicial que así lo dispone, restituye el bien o bienes a quien por derecho corresponda. Durante el lapso comprendido entre estos extremos, más o menos largo según las contingencias de la litis, el secuestro está en relación con la cosa a título de mero tenedor y en definitiva tiene a nombre del propietario o de quien llegue a serlo...” (G.J. Tomo CXXXVIII, pág. 351). Dicho en otras palabras, el secuestro de bienes no tiene de suyo virtualidad para actuar indefectiblemente como causa determinante de la interrupción natural o civil de una prescripción en curso, ello por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesión del prescribiente y el „animus rem sibi habendi”, por efecto del depósito judicial, no lo asume el secuestro, siguiéndose de ello, entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia física por parte de quien venía poseyendo con anterioridad, la respectiva situación posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los artículos 792 y 2523 del Código Civil según se apuntó con anterioridad, la posesión debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupción (cfr, Tomo XXII, pág. 372, XL, pág. 180 y CIII pág. 105-106)” (Cas. Civ., sentencia del 22 de enero de 1993, expediente No. 3524; se subraya).

Del análisis de caso análogo y decisión de la Corte Suprema de Justicia se puede deducir que el secuestro del bien no interrumpe la posesión ejercida por la señora **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, pues en cambio en ese momento como ni el secuestro designado, ni el dueño, ni el demandante ejercieron señorío sobre el bien, ella dejó de ser tenedora (coarrendataria) y pasó a ser poseedora del bien desde la fecha que se practicó diligencia de secuestro y desde la cual fue la única que ejerció actos de señorío sobre el bien inmueble objeto del proceso.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

En cuanto al argumento esgrimido por el Despacho: *“Por todo, el Despacho encuentra que la decisión relativa a rechazar de plano la oposición a la entrega presentada por la empresa Atlantis Daza, estuvo acorde al estatuto procesal, por ostentar la empresa en comento la condición de meros tenedores del local debidamente embargado, secuestrado y rematado. En virtud del arrendamiento practicado con la aquí demandada Tristar, por lo cual se rechazará de plano la solicitud de nulidad elevada por la empresa de turismo”*; más allá de los hechos enunciados lo que se vulneró aquí fue el debido proceso pues no estaba facultado el Comisionado para rechazar la oposición sino que debió remitirla al Juez de conocimiento inmediatamente y toda actuación que viole el debido proceso es nula de plano, razón por la cual no le es dable a la Señora Juez rechazar de plano la oposición pues el comisionado no le remitió la misma sino que le entregó despacho comisorio con la diligencia de entrega formalizada y el bien entregado y además en el mismo acto negar la nulidad por considerar que la opositora era tenedora.

Así mismo, me permito ratificar los argumentos esgrimidos en el escrito de nulidad los cuales sustentan que el comisionado o inspector de policía excedió las facultades comisionadas.

Concepto 198771 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública. Referencia: EMPLEO–Funciones. Inspector de Policía. Radicado: 20219000452192 del 31 de mayo de 2021.

En atención a la comunicación de referencia, en la cual eleva los siguientes interrogantes relacionados con las decisiones emitidas por un Inspector de Policía, a saber:

“1. ¿La decisión emitida por un Inspector de Policía se equipará a la emitida por un Juez de la República en un proceso judicial o tiene una connotación de decisión administrativa, mas no judicial?”

2. ¿Es susceptible de control judicial una decisión emitida por un Inspector de Policía?”

3. ¿Las decisiones de emitidas por un Inspector de Policía, al interior de un proceso policivo, tienen un carácter definitivo o provisional?”

4. ¿La decisión de un Inspector de Policía, puede dar lugar al saneamiento por evicción (Artículo 1895 del C.C.), cuando a partir de dicha decisión, se pierde la posesión y propiedad del bien o al ser una determinación administrativa no puede generar el efecto de una sentencia judicial? Lo anterior considerando que la decisión del inspector se equipare a una sentencia judicial, en los términos del Artículo 1895 del C.C., y a partir del efecto producido por esta última se pierda la posesión y la propiedad, siendo reclamaba mediante esta acción.”

De conformidad a la normativa y apartes jurisprudenciales expuestos, se tiene entonces que el Inspector de Policía en primera instancia le compete conocer y dar aplicación a medidas correctivas frente a la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, haciendo claridad que, en el parágrafo 1° del Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, se exhorta a los Inspectores de Policía para no ejercer funciones ni diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo a las normas especiales de la materia.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Frente a esta última restricción para los Inspectores de Policía dentro del marco de sus competencias, la Corte es clara al dictaminar la prohibición de estos servidores que ejecutan algunos despachos comisorios, con un carácter permisible en cierta medida, toda vez que se encuentra permitida dentro de sus funciones el realizar los que impliquen el desarrollo de actuación administrativa, como es, la entrega y secuestro de bienes. En tal sentido, las funciones jurisdiccionales que se atribuyen a los Inspectores de Policía, se encuentran concentradas en el reconocimiento de las autoridades de policía con funciones jurisdiccionales en el marco del principio de colaboración entre los diferentes órganos del poder público, preservando por la evidente distinción y separación entre las funciones estatales.

Para lo cual, al declarar la exequibilidad del aparte normativo que menciona la falta de competencia de los Inspectores de Policía de ejercer funciones por comisión de jueces, abordando las atribuciones de estos servidores para conocer en primera instancia los procesos para aplicación de medidas correctivas a la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, la Corte es precisa al mencionar que, las normas pertinentes expedidas por el legislador, esto es, como para el caso en concreto, la aplicación de medidas para reparar daños materiales por parte del inspector por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, no atribuye al comisionado (Inspector de Policía) poderes discrecionales, sino estrictamente reglados y sobre una materia precisa.

Por lo tanto, al ser una atribución conferida al Inspector de Policía en el curso de la colaboración entre autoridades, las decisiones que emanen dentro de las competencias de estos servidores podrán ser apeladas ante las autoridades judiciales correspondientes, abordando su primer interrogante, las decisiones emitidas por un inspector de policía no podrán equipararse a las dictadas por un Juez de la República, pues como bien lo concluye la Corte, las funciones de los inspectores de policía se encuentran dispuestas taxativamente por el legislador, que para el tema de posesión y tenencia de los bienes inmuebles, su competencia es en la imposición de medidas correctivas para reparar los daños materiales que devienen de su perturbación, sin que para el efecto pueda hacer las veces de órgano jurisdiccional.

En cuanto a su segundo y tercer interrogante, como bien se expuso anteriormente, el principio de colaboración armónica entre los órganos del poder público, como es el ejecutivo y el judicial, no viola el derecho de los ciudadanos al acceso a la administración justicia, en donde las decisiones que se dicten dentro de un proceso que está compuesto por diversos actos, intervenciones, fases e instancias, la garantía del debido proceso dispuesto en el Artículo 29 constitucional administra el desarrollo del proceso policivo, y por lo tanto, podrá apelarse una decisión emitida por un Inspector de Policía ante la autoridad judicial respectiva, sin que pueda definirse que las decisiones que dicten los inspectores tengan un carácter definitivo.

Por último, en relación con su cuarto interrogante, es importante hacer referencia nuevamente a la disposición que consagra la facultad de los Inspectores de Policía para conocer en **primera instancia** e imponer **medidas correctivas** para la **reparación de daños materiales** que devienen de la perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, sin que para el efecto pueda considerarse que dicha función se enmarque para la protección del comprador de un bien inmueble que surge por vía del saneamiento por evicción dispuesta en el Artículo 1895 del Código Civil, toda vez que esta obligación del vendedor se encuentra supeditada a la decisión de un Juez de la República.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL
ABOGADO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR

PRETENSIONES

1. Solicito al despacho revocar el auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del litigio por violación al debido proceso y restablecer las cosas a su estado antes de la diligencia de entrega del bien.
2. De no conceder la reposición se envíe el presente al superior jerárquico correspondiente.

De la Señora Juez,

Atentamente,

HEBERTO OVIEDO MONTIEL
C.C. No.71.983.046 de Turbo (Antioquía)
T.P. N°247.398 del Consejo Superior de la Judicatura



E. S. D.

Referencia : PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
Demandante : BANCOLOMBIA S.A.
Demandado : SOCIEDAD TRISTAR S.A.S Y OTROS.
Radicado : 54001315300720140005300.

HEBERTO OVIEDO MONTIEL, identificado con la cédula de ciudadanía No.71.983.046 de Turbo (Antioquía), abogado en ejercicio con T.P Nro.247.398 del C.S.J, obrando como apoderado de **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No.60.363.351, representante legal de la sociedad ATLANTIS DAZA, VIAJES Y TURISMO S.A.S., con este escrito interpongo recurso de reposición y en subsidio de apelación contra auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del proceso, teniendo en cuenta los siguientes:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Rechaza de plano la Señora Juez la nulidad interpuesta aduciendo lo siguiente:

Clarificado lo anterior y de cara a los argumentos expuestos por el memorialista, debe el Despacho nuevamente precisar que la oposición presentada por la señora Sandra Daza durante la parte inicial de la diligencia de entrega del pasado 19 de noviembre de 2021, fue analizada y resuelta de manera desfavorable por el Comisionado. Ello al consignarse en el acta: “no se concede oposición alguna”.

Igualmente, del análisis del acta en comento, se concluye que contrario a lo dicho por el memorialista en hecho sexto de su escrito de nulidad, el Comisionado si permitió la presentación de la oposición, ello al escuchar y consignar en el acta, los argumentos en los cuales se fundaba esta, corriendo incluso traslado a la parte contraria para que emitiera las manifestaciones que encontrase pertinentes, y luego de ello, adoptó la decisión de “no conceder” la oposición propuesta. Lo que se traduce en la negativa de la misma.

Decisión anterior, contra la cual ni en el acta de la diligencia, ni en el escrito de nulidad, se consigna la interposición de recurso alguno. Siendo de gran extrañeza que la señora Sandra Daza, estado debidamente representada por apoderado judicial, el doctor Heberto Oviedo, mismo que presentó la nulidad, no haya exigido dejar constancia en el acta sobre la interposición del recurso, si el mismo existiese. Y contrario a ello, se observa que el apoderado firmo el acta, sin dejar constancia alguna sobre la no consignación del recurso interpuesto.

Es de anotar que lo argumentado por el Despacho en sus consideraciones viola el debido proceso pues hace una interpretación errónea del artículo 309 del CGP, el cual en su numeral 7 establece:

7. Si la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refiere a todos los bienes objeto de ella, se remitirá inmediatamente el despacho al comitente, y el término previsto en



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

el numeral anterior se contará a partir de la notificación del auto que ordena agregar al expediente el despacho comisorio. Si la oposición fuere parcial la remisión del despacho se hará cuando termine la diligencia.

Como bien lo afirma la Señora Juez la diligencia se practicó por comisionado y la oposición se refería a la totalidad de los bienes objeto de ella, razón por la cual no procedían recursos sino que el comisionado debía remitir inmediatamente el despacho al comitente y este debió remitir el Despacho comisorio al comitente, lo que no ocurrió en el presente caso, pues el comisionado insistió en la diligencia de entrega al punto de llevarla a cabo aún habiéndose presentado escrito de nulidad, pues extralimitó sus funciones, no estaba facultado para decidir sobre la oposición ya que esta facultad solo le está dada directamente al juez de conocimiento.

Por lo anteriormente expuesto no era procedente interponer recursos ni reposición ni apelación en el acta de la diligencia, pues tampoco estaba el Inspector comisionado facultado para resolverlos, pues el debido proceso establece que al no ser la señora **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, tenedora sino poseedora ya que desde el 2016 como se explicó en escrito de nulidad nadie ejerció actos de señorío del bien y esta los asumió y por tanto la sentencia y el remate no tuvieron efectos sobre ella, tan cierto es esto que la misma señora Juez en los argumentos del auto adujo: “Así las cosas, no es posible entonces aducir haber adquirido la condición de poseedor durante el término que el local permaneció en secuestro judicial, pues como se dijo, el bien se encontraba en administración y legítima tenencia de la secuestre designada. Decisión que era del conocimiento de la empresa Atlantis Daza. Situación distinta es que el tenedor hubiera omitido su deber de continuar el pago de los cánones de arrendamiento a la secuestre o que ésta, omitiera cobrarlos y rendir las cuentas al Despacho”; es decir la misma Juez deduce que la secuestre nunca cobro arriendos y nunca ejerció manutención, cuidado y sostenimiento del bien, razón por la cual también es dable deducir que sí la señora Daza Rodríguez ejerció actos de señorío en el local pues nadie mas los ejerció desde el 2016.

De igual manera me permito traer a colación decisión de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil Magistrado Ponente: ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil nueve (2009).- Ref.: 11001-3103-031-1999-01248-01; donde se establece que el secuestro no interrumpe la posesión del bien; así:

Reprochó al ad quem que con base en el documento obrante a folio 99 del cuaderno No. 1, correspondiente al “acta de [la] diligencia practicada en el inmueble objeto de usucapión el día... 7 de septiembre de 1999”, hubiese colegido que el secuestro del bien “impide la declaración del dominio por el modo de la prescripción adquisitiva”, en razón a que “el depósito judicial arrebató la tenencia jurídica del bien al aquí demandante y por ende el ejercicio de la posesión actual”, ya que esa conclusión “es totalmente equivocada y alejada de la realidad, como lo demuestran todas y cada una de las pruebas practicadas y allegadas al proceso, mediante las cuales se acredita de manera fehaciente que el actor en ningún instante ha dejado de ejecutar sobre el inmueble... actos o hechos positivos de aquellos [a] que solo da derecho el dominio en forma ininterrumpida desde la fecha antes señalada y aún continua haciéndolo, disponiendo del mismo, efectuando mejoras, mantenimiento, pago de servicios públicos, impuestos, etc.”.

Aseveró que “la jurisprudencia y la doctrina desde vieja data ha[n] reiterado que el EMBARGO, SECUESTRO O DEPÓSITO JUDICIAL no impiden ejercer los actos de posesión sobre determinado bien”, en pro de lo cual invocó el mismo fallo de esta Corporación que citó el Tribunal. 5. Censuró que el sentenciador de segunda instancia, en opinión del recurrente, hubiese considerado que, a consecuencia de la diligencia de secuestro,



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

el inmueble materia del litigio se encontrara fuera del comercio, divergencia que sustentó con transcripción de la sentencia de la Sala fechada el 20 de mayo de 1930, luego de lo cual añadió que “si los bienes EMBARGADOS Y SECUESTRADOS se (sic) estuviesen fuera del comercio humano, en primer lugar sería ilícito hacer cualquier tipo de negociación, tradición o compraventa de éstos, haciéndose imposible su adquisición por cualquier medio o modo, razón por la cual la posición del Tribunal al respecto, es totalmente contraevidente, toda vez que los bienes que soportan estos gravámenes sí son objeto de adquisición por los medios, formas y modos establecidos en la ley”.

Calificó de equivocada la apreciación del ad quem, relativa a que la manifestación que hizo el secuestro en la diligencia recogida en el acta que obra a folio 99 del cuaderno principal, cuando señaló que “desde ya asumo la administración de este inmueble para lo cual se hace necesario suscribir un contrato de arrendamiento”, acreditaba por sí sola la tenencia del mismo en cabeza del auxiliar de la justicia, puesto que dicha expresión “es un simple decir o una mera intención”, más cuando él nunca realizó “ninguna función, acto o hecho como administrador” y, mucho menos, “suscribió CONTRATO DE ARRENDAMIENTO... sobre el referido inmueble con el poseedor señor GERMAN TARCISIO GODOY ARDILA” o con otra persona, ni lo dejó en depósito, “sino que por el contrario el demandante en este proceso es quien siempre desde mediados de 1978 ha venido ejerciendo actos de señor y dueño”, los cuales se encuentran “plenamente probados mediante la declaración de testigos, documentos, inspección y peritación”.

En oportunidad más cercana, la Corporación insistió en que ni el embargo, ni el secuestro de un bien, traducen la interrupción de la prescripción adquisitiva, puesto que “medidas judiciales de ese linaje constituyen apenas títulos de mera tenencia como lo tiene definido el artículo 775 del mismo código [civil], luego de los secuestros debe decirse que son siempre servidores de la posesión ajena, o por mejor expresarlo ejecutores materiales del señorío posesorio que otros ostentan...” (se subraya). Adelante observó, que cualquiera sea la modalidad y la finalidad del secuestro practicado, él “... „se perfecciona con la entrega de la cosa que a título precario hace el juez al secuestro; y este cesa en sus funciones cuando, en acatamiento de la orden judicial que así lo dispone, restituye el bien o bienes a quien por derecho corresponda. Durante el lapso comprendido entre estos extremos, más o menos largo según las contingencias de la litis, el secuestro está en relación con la cosa a título de mero tenedor y en definitiva tiene a nombre del propietario o de quien llegue a serlo...” (G.J. Tomo CXXXVIII, pág. 351). Dicho en otras palabras, el secuestro de bienes no tiene de suyo virtualidad para actuar indefectiblemente como causa determinante de la interrupción natural o civil de una prescripción en curso, ello por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesión del prescribiente y el „animus rem sibi habendi”, por efecto del depósito judicial, no lo asume el secuestro, siguiéndose de ello, entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia física por parte de quien venía poseyendo con anterioridad, la respectiva situación posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida tuvo efectiva vigencia, habida cuenta que en esas condiciones, en ausencia de prueba positiva en contrario y por mandato de los artículos 792 y 2523 del Código Civil según se apuntó con anterioridad, la posesión debe juzgarse legalmente recobrada y por lo tanto continuada sin interrupción (cfr, Tomo XXII, pág. 372, XL, pág. 180 y CIII pág. 105-106)” (Cas. Civ., sentencia del 22 de enero de 1993, expediente No. 3524; se subraya).

Del análisis de caso análogo y decisión de la Corte Suprema de Justicia se puede deducir que el secuestro del bien no interrumpe la posesión ejercida por la señora **SANDRA JEANNETHE DAZA RODRÍGUEZ**, pues en cambio en ese momento como ni el secuestro designado, ni el dueño, ni el demandante ejercieron señorío sobre el bien, ella dejó de ser tenedora (coarrendataria) y pasó a ser poseedora del bien desde la fecha que se practicó diligencia de secuestro y desde la cual fue la única que ejerció actos de señorío sobre el bien inmueble objeto del proceso.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

En cuanto al argumento esgrimido por el Despacho: *“Por todo, el Despacho encuentra que la decisión relativa a rechazar de plano la oposición a la entrega presentada por la empresa Atlantis Daza, estuvo acorde al estatuto procesal, por ostentar la empresa en comento la condición de meros tenedores del local debidamente embargado, secuestrado y rematado. En virtud del arrendamiento practicado con la aquí demandada Tristar, por lo cual se rechazará de plano la solicitud de nulidad elevada por la empresa de turismo”*; más allá de los hechos enunciados lo que se vulneró aquí fue el debido proceso pues no estaba facultado el Comisionado para rechazar la oposición sino que debió remitirla al Juez de conocimiento inmediatamente y toda actuación que viole el debido proceso es nula de plano, razón por la cual no le es dable a la Señora Juez rechazar de plano la oposición pues el comisionado no le remitió la misma sino que le entregó despacho comisorio con la diligencia de entrega formalizada y el bien entregado y además en el mismo acto negar la nulidad por considerar que la opositora era tenedora.

Así mismo, me permito ratificar los argumentos esgrimidos en el escrito de nulidad los cuales sustentan que el comisionado o inspector de policía excedió las facultades comisionadas.

Concepto 198771 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública. Referencia: EMPLEO–Funciones. Inspector de Policía. Radicado: 20219000452192 del 31 de mayo de 2021.

En atención a la comunicación de referencia, en la cual eleva los siguientes interrogantes relacionados con las decisiones emitidas por un Inspector de Policía, a saber:

“1. ¿La decisión emitida por un Inspector de Policía se equipará a la emitida por un Juez de la República en un proceso judicial o tiene una connotación de decisión administrativa, mas no judicial?”

2. ¿Es susceptible de control judicial una decisión emitida por un Inspector de Policía?

3. ¿Las decisiones de emitidas por un Inspector de Policía, al interior de un proceso policivo, tienen un carácter definitivo o provisional?

4. ¿La decisión de un Inspector de Policía, puede dar lugar al saneamiento por evicción (Artículo 1895 del C.C.), cuando a partir de dicha decisión, se pierde la posesión y propiedad del bien o al ser una determinación administrativa no puede generar el efecto de una sentencia judicial? Lo anterior considerando que la decisión del inspector se equipare a una sentencia judicial, en los términos del Artículo 1895 del C.C., y a partir del efecto producido por esta última se pierda la posesión y la propiedad, siendo reclamaba mediante esta acción.”

De conformidad a la normativa y apartes jurisprudenciales expuestos, se tiene entonces que el Inspector de Policía en primera instancia le compete conocer y dar aplicación a medidas correctivas frente a la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, haciendo claridad que, en el parágrafo 1° del Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, se exhorta a los Inspectores de Policía para no ejercer funciones ni diligencias jurisdiccionales por comisión de los jueces, de acuerdo a las normas especiales de la materia.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL

ABOGADO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Frente a esta última restricción para los Inspectores de Policía dentro del marco de sus competencias, la Corte es clara al dictaminar la prohibición de estos servidores que ejecutan algunos despachos comisorios, con un carácter permisible en cierta medida, toda vez que se encuentra permitida dentro de sus funciones el realizar los que impliquen el desarrollo de actuación administrativa, como es, la entrega y secuestro de bienes. En tal sentido, las funciones jurisdiccionales que se atribuyen a los Inspectores de Policía, se encuentran concentradas en el reconocimiento de las autoridades de policía con funciones jurisdiccionales en el marco del principio de colaboración entre los diferentes órganos del poder público, preservando por la evidente distinción y separación entre las funciones estatales.

Para lo cual, al declarar la exequibilidad del aparte normativo que menciona la falta de competencia de los Inspectores de Policía de ejercer funciones por comisión de jueces, abordando las atribuciones de estos servidores para conocer en primera instancia los procesos para aplicación de medidas correctivas a la reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, la Corte es precisa al mencionar que, las normas pertinentes expedidas por el legislador, esto es, como para el caso en concreto, la aplicación de medidas para reparar daños materiales por parte del inspector por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, no atribuye al comisionado (Inspector de Policía) poderes discrecionales, sino estrictamente reglados y sobre una materia precisa.

Por lo tanto, al ser una atribución conferida al Inspector de Policía en el curso de la colaboración entre autoridades, las decisiones que emanen dentro de las competencias de estos servidores podrán ser apeladas ante las autoridades judiciales correspondientes, abordando su primer interrogante, las decisiones emitidas por un inspector de policía no podrán equipararse a las dictadas por un Juez de la República, pues como bien lo concluye la Corte, las funciones de los inspectores de policía se encuentran dispuestas taxativamente por el legislador, que para el tema de posesión y tenencia de los bienes inmuebles, su competencia es en la imposición de medidas correctivas para reparar los daños materiales que devienen de su perturbación, sin que para el efecto pueda hacer las veces de órgano jurisdiccional.

En cuanto a su segundo y tercer interrogante, como bien se expuso anteriormente, el principio de colaboración armónica entre los órganos del poder público, como es el ejecutivo y el judicial, no viola el derecho de los ciudadanos al acceso a la administración justicia, en donde las decisiones que se dicten dentro de un proceso que está compuesto por diversos actos, intervenciones, fases e instancias, la garantía del debido proceso dispuesto en el Artículo 29 constitucional administra el desarrollo del proceso policivo, y por lo tanto, podrá apelarse una decisión emitida por un Inspector de Policía ante la autoridad judicial respectiva, sin que pueda definirse que las decisiones que dicten los inspectores tengan un carácter definitivo.

Por último, en relación con su cuarto interrogante, es importante hacer referencia nuevamente a la disposición que consagra la facultad de los Inspectores de Policía para conocer en **primera instancia** e imponer **medidas correctivas** para la **reparación de daños materiales** que devienen de la perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles, sin que para el efecto pueda considerarse que dicha función se enmarque para la protección del comprador de un bien inmueble que surge por vía del saneamiento por evicción dispuesta en el Artículo 1895 del Código Civil, toda vez que esta obligación del vendedor se encuentra supeditada a la decisión de un Juez de la República.



HEBERTO OVIEDO MONTIEL
ABOGADO
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

PRETENSIONES

1. Solicito al despacho revocar el auto del 01 de febrero del 2022 notificado el día 02 del mismo mes y año, por el cual se rechazó de plano nulidad interpuesta contra diligencia de entrega del bien objeto del litigio por violación al debido proceso y restablecer las cosas a su estado antes de la diligencia de entrega del bien.
2. De no conceder la reposición se envíe el presente al superior jerárquico correspondiente.

De la Señora Juez,

Atentamente,

HEBERTO OVIEDO MONTIEL
C.C. No.71.983.046 de Turbo (Antioquía)
T.P. N°247.398 del Consejo Superior de la Judicatura